

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001-31-05-001-2013-00490-02, promovido por JUAN BERNARDO RAVE CADAVID contra **i) ASEO Y SOSTINIMIENTO INDUSTRIAL S.A. EN LIQUIDACIÓN** en adelante **ASINDUSTRIA S.A. EN LIQUIDACIÓN** y **ii) COOMEVA EPS**, a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia absolutoria emitida el 28 de julio de 2016 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **009 de 2023**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el demandante pretende:

- Se declare, como pretensión principal, que entre él y Asindustrias S.A en liquidación existió un contrato laboral a término fijo de un año desde el 28 de agosto de 2008 hasta el 28 de agosto de 2012. O subsidiariamente, que existió un contrato laboral a término indefinido desde el 28 de agosto de 2008.
- Se declare, como pretensión principal, que Asindustrias S.A., en liquidación lo despidió unilateralmente y sin justa causa el 3 de abril de 2012. Y en consecuencia se le condene a cancelarle la indemnización por despido injusto, consistente en los salarios dejados de percibir desde el 3 de abril al 28 de agosto de 2012, o subsidiariamente la correspondiente al contrato a término indefinido.
- Que se condene a la reliquidación de todas las prestaciones sociales y vacaciones desde el 28 de agosto de 2008 al 3 de abril de 2012.
- Se declare como pretensión principal que, Coomeva EPS no le liquidó las incapacidades generadas y aprobadas en su favor, relacionadas en el numeral 7° de las pretensiones, y en consecuencia se condene a dicha entidad o subsidiariamente a Asindustrias S.A a pagarle tales incapacidades.
- Se declare que Asindustrias S.A. no realizó los incrementos a su salario desde el año de 2009, de conformidad al porcentaje establecido por el Gobierno Nacional, y en consecuencia se le condene a pagar tales incrementos.
- Indexación
- Costas y agencias en derecho.

Para fundamentar sus pretensiones expuso que, ingresó a laborar a Asindustrias S.A., en liquidación desde el 27 de agosto de 2004, mediante contrato de trabajo a un año hasta el 28 de agosto de 2008, fecha en la cual nuevamente se celebró un contrato de trabajo a término fijo por un año, devengando como salario inicial \$660.000 mensuales. El oficio desempeñado era operador de máquinas de perforación. Fue afiliado al sistema de seguridad social en el ISS, Coomeva y ARP Positiva.

Menciona que en el mes de diciembre de 2008 empezó a padecer osteomielitis de tibia izquierda de carácter crónica, y debido a intervenciones quirúrgicas tuvo que ser incapacitado en diversas ocasiones desde el 2009, pero las incapacidades relacionadas en el hecho 9° no le fueron pagadas. La ultima incapacidad fue del 5 de marzo al 3 de abril de 2012, procediendo a reincorporarse a sus actividades laborales y allegando a su empleador las recomendaciones dadas para ejercer su trabajo. Le indicaron que lo reubicarían y que debía esperar a que lo llamaran, pero a los 30 días le indican que su contrato de trabajo había terminado porque la empresa ya no existía. El 16 de mayo de 2012 fue citado a notificarse de la terminación del contrato, sin embargo, en la liquidación indican que la fecha de retiro fue desde el 3 de abril de 2012, en la cual no le indicaron que lo despedirían.

Por concepto de liquidación le entregaron \$1.534.248 del 28 de agosto de 2008 al 3 de abril de 2012, indicando como salario básico \$660.000, sin tener en cuenta que el mismo era variable. Fue despedido sin justa causa, toda vez el contrato de trabajo terminaba el 28 de agosto de 2012, sin recibir indemnización alguna. Nunca fue reubicado, ni se aplicaron las recomendaciones médicas efectuadas por Coomeva EPS, no le realizaron incremento a su salario. Fue valorado por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez determinándose una PCL del 38,50%.

Admitida la demanda y notificadas las demandadas dieron repuesta así:

i) ASINDUSTRIAS S.A. EN LIQUIDACIÓN, se opone a las pretensiones argumentando que los contratos firmados con el demandante fueron por el término que dure la obra o labor determinada, por lo que no hubo despido sino terminación del contrato de trabajo por finalización de la obra para la cual había sido solicitada su vinculación. Niega que haya lugar a reliquidar prestaciones sociales al ser pagadas conforme al salario y tiempo laborado.

Refiere que Coomeva EPS liquidó y pagó las incapacidades que legalmente le correspondían, las cuales fueron pagadas por Asindustrias S.A. en Liquidación

durante los primeros 180 días, las cuales le fueron reembolsadas por dicha E.P.S., y que no le corresponde dicho pago sino al fondo de pensiones. Añade que debido a los problemas de salud del demandante no volvió a recibir salarios desde el año 2009 sino auxilios por incapacidad por prorrogas continuas hasta el 3 de abril de 2012. Niega que haya lugar a incrementos salariales al no haber prestación del servicio desde el 2009 hasta el 3 de abril de 2012.

Propone las excepciones de mérito carencia de objeto de la demanda, buena fe, terminación del contrato de trabajo por terminación de la obra o labor contratada, prescripción.

ii) COOMEVA EPS se opone a las pretensiones argumentando que, canceló al aportante Asindustrias S.A. en Liquidación los 180 días de incapacidad a los que se encontraba obligada legalmente, ya que para la fecha era permitido. Propone las excepciones de mérito inexistencia de la obligación a su cargo, cobro de lo no debido, buena fe, temeridad y mala fe, prescripción, y como previa propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual se dejó para resolver en la sentencia.

En la audiencia del artículo 77 del CPT y de la S.S., se impartió aprobación a la transacción celebrada entre el demandante y Asindustria S.A. en Liquidación, declarando terminado el proceso respecto a las pretensiones, con excepción de la pretensión referente al pago de las incapacidades laborales invocada frente a ambas demandadas.

En **sentencia del 28 de julio de 2016**, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción falta de legitimación en la causa por pasiva, y absolvió a las demandadas de la pretensión del pago de incapacidades. Y condenó en costas al demandante en \$689.454.

RECURSO DE APELACIÓN

Fue presentado por la parte demandante indicando:

“Teniendo en cuenta los principios de economía procesal y prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el despacho debió prescindir de la reclamación administrativa a Colpensiones y vincularla al presente proceso. Además de ello, considero que se omitieron preceptos constitucionales como los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional dentro de los cuales se protege el derecho a la seguridad social, pues mi poderdante es una persona de muy escasos recursos y desconocedor de la normativa existente, por tanto, considero que era la EPS quien estaba en el deber de acompañamiento a su afiliado dentro del trámite de reclamación al fondo de pensiones”

Preliminarmente se hace necesario exponer que, corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes presentó alegaciones ante esta instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si en el presente caso se encuentra configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva como lo declaró la *a quo*, o si por el contrario debe revocarse la sentencia e imponer condena.

CONSIDERACIONES

Frente al recurso promovido, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Según el certificado emitido por Coomeva EPS¹, dicha entidad pagó 180 días de incapacidad entre el 19 de junio y el 15 de diciembre de 2009.

Lo pretendido por el demandante es el pago de incapacidades superiores a 180 días que corresponden a los periodos 11 de diciembre de 2010 al 3 de abril de 2012:

DESDE	HASTA	DIAS
11/12/2010	9/01/2011	30
10/01/2011	8/02/2011	30

¹ Fl.195

9/02/2011	10/03/2011	30
11/03/2011	9/04/2011	30
10/04/2011	9/05/2011	30
10/05/2011	8/06/2011	30
9/06/2011	8/07/2011	30
9/07/2011	7/08/2011	30
8/08/2011	6/09/2011	30
7/09/2011	6/10/2011	30
7/10/2011	5/11/2011	30
6/11/2011	5/12/2011	30
6/12/2011	4/01/2012	30
5/01/2012	3/02/2012	30
4/02/2012	4/03/2012	30
5/03/2012	3/04/2012	30
TOTAL		480

Dentro del ordenamiento legal se ha contemplado el reconocimiento de incapacidades laborales y se ha determinado igualmente cuándo están a cargo del empleador, las EPS o en su defecto a cargo de los fondos de pensiones. Del artículo 206 de la Ley 100 de 1993 se deriva que las entidades del Sistema de Salud, son las responsables, en principio, del pago de las incapacidades originadas en enfermedad general por los primeros 180 días.

Por otro lado, el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, derogado por el artículo 61 del Decreto 1352 de 2013, con excepción de los incisos 1 y 2 del artículo 5 y del inciso 2 y párrafos 2 y 4 de su artículo 6, contemplaba para la época de las incapacidades acá reclamadas, que en caso que la incapacidad se mantenga es posible prorrogar el trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral hasta por 360 días adicionales a los primeros 180 de incapacidad temporal, siempre que exista un concepto de rehabilitación favorable, y se reconozca en favor del trabajador un auxilio equivalente a la incapacidad de la que era beneficiario.

Así, interpretando el alcance de las normas vigentes para la época, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional², en caso que al trabajador, por causa de su estado de salud, le sean expedidas por su médico tratante, incapacidades y éstas no superen los 180 días, en primer lugar le corresponde a la Empresa Promotora de Salud el pago de las mismas; sin embargo, en el evento que

² Sentencia T-485 de 2010, T-404 de 2010, T-137 de 2012

se sobrepasen los 180 días, el responsable de su pago es el fondo de pensiones, ya sea hasta que se produzca un dictamen sobre su pérdida de capacidad laboral o se restablezca su salud. Si el dictamen indica que el trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, se causará en su favor la pensión de invalidez, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos legales.

Igualmente, si el dictamen de pérdida de capacidad laboral arroja que el trabajador presenta una incapacidad inferior al 50%, y se siguen prescribiendo incapacidades laborales por el médico tratante, le corresponderá al fondo de pensiones seguir pagándolas, siempre que exista concepto favorable de rehabilitación o hasta que este se emita, o se pueda efectuar una nueva calificación de su invalidez.

En este caso se advierte que, el ISS hoy Colpensiones remitió al demandante a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia para que resolviera la controversia por su calificación, entidad que expidió dictamen el 10 de febrero de 2011 otorgando una PCL del 38,5% estructurada el 25 de junio de 2009, la cual fue confirmada por la Junta Nacional de Calificación en dictamen del 8 de febrero de 2012.

El 4 de abril de 2012 Coomeva EPS emite recomendación ocupacional a Asindustrias S.A. en Liquidación, indicando que según la calificación del demandante se trata de una incapacidad permanente parcial que genera la reincorporación a su trabajo y que valorado por medicina laboral se le generan restricciones y recomendaciones ocupacionales³.

Así las cosas, queda claro que, al haberse sobrepasado los 180 días de incapacidad, el responsable del pago de las incapacidades reclamadas es el fondo de pensiones, el cual no fue demandado por el señor Juan Bernardo Rave Cadavid pese a que él mismo indica en el hecho 8° de la demanda que al reclamarlas a Coomeva EPS le indicaron que quien debía pagarlas era el ISS hoy Colpensiones.

³ Fl.49

Pues bien, sabido es que, quien demanda debe tener legitimación en la causa por activa, y quien es demandado la debe tener por pasiva. Al respecto no sobra aclarar que “(Las) condiciones o cualidades que constituyen la legitimación en la causa, se refieren a la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso (incluyendo a los terceros intervinientes) y el interés en litigio, o sea el objeto de la decisión reclamada; pero no a la relación que pueda haber entre esas partes y el derecho material o la situación jurídico-material pretendidos; por eso la inexistencia de estos o de su titularidad, en caso de existir, no excluye la debida legitimación en la causa, sino la razón o fundamento para obtener la sentencia favorable de fondo.” Así se indica en la obra *Nociones generales del derecho procesal civil* pág. 299 a 300 del profesor Devis Echandía.

Conforme a la jurisprudencia de la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia⁴, la “**legitimación en causa**”, hace referencia a la necesidad de que entre la persona que convoca o es convocada al pleito y el derecho invocado exista un vínculo que legitime esa intervención, de suerte que el veredicto que se adopte les resulte vinculante.

Ha sido insistente esa Corporación al calificarlo como un presupuesto de la acción, cuya ausencia impide aproximarse al fondo de la contienda, trayendo aparejado la desestimación de lo pedido. Dicha legitimación la deben ostentar tanto la parte demandante (activa) que le permita accionar, como la demandada (pasiva) para enfrentar los reclamos, pudiendo ser cuestionada mediante la interposición de la correspondiente excepción previa, e incluso de oficio y que de hallarse probada podrá ser declarada mediante sentencia anticipada en cualquier estado del proceso. En la sentencia SC2215-2021 Radicación n° 11001-31-03-022-2012-00276-02 del 9 de junio de 2021, indicó dicha Corporación:

“En lo tocante a la legitimación en la causa esta Corte ha adocinado lo siguiente:

«El nexo que une a las partes, permitiendo a la una accionar y a la otra responder a tales reclamos, es lo que se conoce como legitimación en la causa. Su importancia es tal, que no depende de la forma como asuman el debate los intervinientes, sino que el fallador debe establecerla prioritariamente en cada pugna al entrar a desatar la litis o, en casos excepcionales, desde sus albores.

⁴ Sentencia SC2215-2021 Radicación n° 11001-31-03-022-2012-00276-02 del 9 de junio de 2021.

De no cumplirse tal conexión entre quienes se traban en un pleito, se presentaría una restricción para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanación, sino que, por su trascendencia, tiene una connotación sustancial que impide abordar el fondo de la contienda.

La Corte en sentencia de 24 de julio de 2012, exp. 1998-21524-01, reiteró que “[l]a legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (...) En efecto, ésta ha sostenido que ‘el interés legítimo, serio y actual del ‘titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico’ (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia ‘de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)’ (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla ‘con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular’ (cas. civ. sentencia de 1º de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste’ (Sent. de Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. N° 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. N° 6050)» (CSJ SC4468 de 9 de abr. de 2014, Rad. 2008-00069-01).”

Bajo el contexto anterior no se advierte que Asindustria S.A. en Liquidación y Coomeva EPS sean las personas que la ley faculta para resistir esta acción, pues si bien una fungió en calidad de empleador y la otra como entidad de seguridad social en salud a la cual estuvo vinculado el demandante, de las pruebas allegadas e incluso del objeto de la misma pretensión que se resuelve, se evidencia como entidad obligada al pago de las incapacidades superiores a los 180 días, el fondo de pensiones al cual estuvo vinculado el demandante para la época de los hechos.

Aunque el recurrente acude a los principios de economía procesal y prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, para indicar que se debió prescindir de la reclamación administrativa a Colpensiones y vincularla al presente proceso, se destaca que, si bien en los procesos laborales puede suceder que sea indispensable la integración de un litisconsorcio necesario, esto es, que las partes en conflicto o una de ellas deban estar obligatoriamente compuestas por una pluralidad de

sujetos, en este caso es dable resolver la litis con las personas frente a las cuales fueron dirigidas las pretensiones.

De otra parte se debe señalar que, aunque la normatividad y la jurisprudencia vigente para la época consagraban el deber de acompañamiento de la EPS, en relación con el trámite necesario para obtener el pago de las incapacidades superiores a los primeros 180 días, enviando directamente al fondo de pensiones los documentos requeridos, a efecto de que la solicitud sea estudiada y decidida⁵, ello no eximía a la parte demandante de dirigir la demanda contra el directamente obligado al pago de sus pretensiones.

En consecuencia, se **confirmará** la sentencia, en tanto las demandadas no tienen las condiciones para que les sean exigidos los reclamos del demandante, esto es, no son las titulares de la obligación alegada, configurándose la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandante, por resultar vencida con la formulación del recurso de apelación. Se fija como agencias en derecho la suma total de \$1.160.000, dividida en partes iguales a favor de las demandadas, conforme al Acuerdo 1887 de 2003, vigente al momento de presentación de la demanda⁶.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

⁵ Sentencia T-920 de 2009.

⁶ Demanda presentada el 2 de mayo de 2013.

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandante. Se fija como agencias en derecho la suma total de \$1.160.000, dividida en partes iguales a favor de las demandadas, conforme al Acuerdo 1887 de 2003, vigente al momento de presentación de la demanda.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d2213b4e9b9d79463a3b93ae5b4d2741bc6ca128b22ac67c8f2ae770c5883dc9**

Documento generado en 02/02/2023 03:27:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>